

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, dos (2) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05001310501620160070101, promovido por el señor **GUILLERMO ANTONIO VÉLEZ VÉLEZ**, en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante frente a la sentencia emitida el 09 de marzo de 2018 por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **239**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Pretende el demandante se declare le asiste derecho a la sustitución pensional con ocasión del fallecimiento de su cónyuge señora María Ruby Castañeda de Vélez a partir del 11/11/2013; consecuencialmente se condene su pago con los reajustes anuales de ley, las mesadas adicionales de junio y diciembre, los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, la indexación y las costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones expuso el demandante que contrajo matrimonio con la señora María Ruby Castañeda de Vélez el 04/05/1964, que producto de dicha relación procrearon 5 hijos, todos hoy mayores de edad. Que convivieron por espacio superior a 5 años, de manera continua e ininterrumpida, compartiendo techo, lecho y mesa; bajo el afecto, auxilio mutuo, el apoyo económico y el acompañamiento espiritual de carácter permanente, característicos de la vida en pareja.

Que su cónyuge era pensionada por vejez a cargo del ISS hoy Colpensiones, quien falleció el 11/11/2013; para lo cual solicitó el pago de la sustitución pensional el 09/09/2015 sin que hasta la fecha le hayan dado respuesta.

Respecto al libelo genitor, Colpensiones en su oportunidad procesal expuso:

Que acepta el matrimonio celebrado entre las partes, pero aclara que la pareja presenta separación de cuerpos y de bienes desde el año 1988 según RCM. Que no le consta que la señora María Ruby Castañeda de Vélez fue afiliada al ISS hoy Colpensiones como tampoco la calidad de pensionada ni la convivencia entre la pareja.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

ABSOLVIÓ a Colpensiones de todas las pretensiones de la demanda. DECLARÓ probada la excepción de inexistencia de la obligación de reconocer y

pagar la pensión de sobrevivientes, y Condenó en Costas Procesales a cargo de la parte actora y a favor de la entidad demandada.

RECURSO DE APELACIÓN

PARTE DEMANDANTE. Indica que no comparte la decisión del *a quo*, en la medida que el demandante demostró al interior del proceso la convivencia con la pensionada fallecida durante 5 años en cualquier tiempo, sin que sea requisito indispensable que dicha convivencia lo sea en los últimos 5 años anteriores al fallecimiento de la afiliada.

Que los testigos fueron claros en establecer que la convivencia entre la pareja lo fue por más de 25 años, con ayuda mutua, que siguió respondiendo por los hijos, aunado a que del RCM se desprende con claridad que la pareja se separó de cuerpos más no hubo cesación de los efectos civiles del matrimonio, por ende, el vínculo matrimonial continuó vigente.

Que consecuentemente se condene al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100/1993.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

COLPENSIONES. Refiere que una vez revisada la historia laboral de la causante señora María Ruby Castañeda Cardona la misma no acredita el requisito de las semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores al momento en que se produjo la muerte, es decir entre el 11 de noviembre de 2010 al 11 de noviembre de 2013, toda vez que solo acredita 0 semanas de cotización, que reporta como última cotización el periodo de junio de 2003, no cumpliendo con lo exigido por la Ley 797 de 2003, motivo por el cual improcedente sería acceder al reconocimiento pensional bajo esta normatividad.

Que una vez verificado el expediente administrativo se evidencia certificado de Partida de Matrimonio entre el demandante y la causante con fecha de

celebración del 04 de mayo de 1964, documento en mención en el cual figura la siguiente nota marginal: “Por fallo del juzgado 1 Civil del Circuito de Medellín de fecha mayo 9 de 1988 se decretó la separación de cuerpos y de bienes”, por ende el demandante no acredita la calidad de beneficiario toda vez que no existe sociedad conyugal vigente con la causante hasta su muerte, no se acredita el tiempo mínimo de convivencia con anterioridad al fallecimiento de la causante, esto es cinco (5) años continuos, motivo por el cual no es viable el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes solicitada.

PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en determinar; si hizo bien o no el A quo en negar la sustitución pensional a favor del demandante señor Guillermo Antonio Vélez Vélez por el fallecimiento de su cónyuge señora María Ruby Castañeda de Vélez, caso contrario verificar la causación, retroactivo y demás peticiones de la demanda.

CONSIDERACIONES

No es objeto de discusión, pues fue aceptado por las partes al interior del proceso, que la señora María Ruby Castañeda de Vélez falleció el día 11 de noviembre de 2013; percibía pensión de vejez reconocida por el I.S.S. mediante Resolución No 01169 del 05/02/2004, con efectos a partir del 01 de julio de 2003 (folios 95 y 96 anexo 06 archivo 2da instancia); que el señor Guillermo Antonio Vélez Vélez y la señora María Ruby Castañeda de Vélez contrajeron matrimonio el día 04 de mayo de 1964, según registro civil obrante a folio 19 anexo 03, donde aparece la siguiente nota “...*por fallo del Juzgado 1 Civil del Circuito de Medellín, de fecha mayo 9/88 se decretó la separación de cuerpos y de bienes...*”.

Con ocasión del fallecimiento de la pensionada señora Castañeda de Vélez, el demandante solicitó el pago de la sustitución pensional el 09/09/2015 la cual le fue negada por Colpensiones bajo el argumento que no se acreditó el requisito de convivencia.

Pues bien, al haber fallecido la causante señora María Ruby Castañeda de Vélez falleció el día 11 de noviembre de 2013, le son aplicables el literal a) y el inciso 3° del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, veamos:

“... Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

b)
(...)

*<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exigible> En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. **La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;** ...” (Negritas fuera de texto).*

La jurisprudencia vigente de la SCL de la CSJ, tiene señalado que el cónyuge supérstite con vínculo matrimonial vigente, separado de hecho, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, siempre que acredite convivencia con el causante por un lapso no inferior a cinco años en cualquier tiempo, sin que sea necesario probar que durante ese lapso se conservó un vínculo afectivo; ver Sentencias SL2767-2022, SL2257-2022, SL997-2022, entre otras.

Ahora, que aunque es cierto la celebración del matrimonio entre el demandante la pensionada fallecida el 04/05/1964 no se puede desconocer la separación de legal y de bienes de la pareja desde el año 1988 (RCM folio 19), aunado a que en el interrogatorio de parte surtido por el demandante este aceptó que para el momento del fallecimiento de la pensionada ésta vivía sola en su casa, que convivieron 24 años y que se separaron por lo Civil legalmente, pero no por lo católico; situación que de un lado, muestra el incumplimiento de lo consagrado en la parte final del inciso tercero del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, conforme al cual “La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente” y del otro, evidencia que entre quienes habían contraído matrimonio, no existía ningún lazo afectivo, **ni patrimonial**, como para considerar al demandante beneficiario de la pensión de sobrevivientes causada por la pensionada fallecida.

Téngase en cuenta que la expresión “*con la cual existe la sociedad conyugal vigente*” fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-515 del 29 de octubre de 2019, al estudiar una demanda donde se afirmaba que la norma vulneraba el derecho de igualdad (Art. 13 C.P.), al establecer como requisito para el reconocimiento de la cuota parte de la pensión de sobrevivientes, que el cónyuge supérstite separado de hecho, mantenga en vigor la sociedad conyugal a la fecha del fallecimiento del causante, excluyendo al cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal disuelta. Frente a lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional¹ indicó que los cónyuges separados de hecho con y sin sociedad conyugal vigente están en situaciones diferentes, por lo cual, no son sujetos de tratamiento igual; explicando que cuando se disuelve la sociedad conyugal, se extinguen los efectos patrimoniales del vínculo matrimonial y ello sumado a la separación de hecho de la pareja, conlleva a la inexistencia de vínculos afectivos o económicos para derivar de allí la calidad de beneficiario; veamos:

*“...Por un lado, el cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal vigente mantiene en su totalidad los **efectos de orden patrimonial**. Si bien existe una ruptura de la cohabitación o convivencia y apoyo mutuo -a pesar de haber existido por lo menos 5 años-, los cónyuges no han expresado su deseo de dar por terminada su sociedad conyugal, **al punto que preservan el vínculo económico y los derechos que de este se derivan**. Por otro lado, en el caso del cónyuge separado de hecho con*

¹ Aclaración de voto Magistrada Diana Fajardo Rivera, salvamento de voto Magistrada Cristina Pardo Schlesinger

sociedad conyugal disuelta, por decisión libre de los cónyuges se extinguen los efectos patrimoniales del vínculo matrimonial, aunado a la separación de hecho, por lo que, no existen en este caso vínculos afectivos o económicos que permitan inferir su calidad de beneficiario...”.

El propósito o el objeto de la sustitución pensional o de la pensión de sobrevivientes, es pertinente recordar que busca brindar protección a los miembros del grupo familiar del pensionado fallecido, quienes ante la ausencia de aquél, verían afectado su sostenimiento y la atención de sus necesidades básicas, al verse desprovistos del apoyo económico que en vida les brindada el causante.

Así las cosas, la Corte Constitucional en Sentencia C-1094 de 2003, al estudiar la exequibilidad de varios artículos de la Ley 797 de 2003, indicó que ***“...La finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y compartía con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades...”*** (Negritas fuera de texto).

Caso distinto yace en el presente caso, donde además de la separación legal que se dio desde el año 1988, tampoco se mantuvo un vínculo económico, pues la pareja decidió liquidar y separar sus bienes legalmente; lo que muestra ***ausencia de lazos afectivos y económicos*** y en tales circunstancias, no tiene cabida invocar la calidad de miembro del grupo familiar del causante, para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes.

Por lo anterior, esta Sala de Decisión Laboral, encuentra que no le asiste razón al demandante, ya que, al haberse presentado la separación legal de cuerpos y de bienes conformada con la causante, no se cumple con el presupuesto normativo consagrado en la norma citada, la cual fue declarada exequible por la H. Corte Constitucional en Sentencia C-515 de 2019.

No desconoce esta Corporación, que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencias SL5169-2019, SL359-2021, SL1476-2021, SL3251-2021, ha reconocido el derecho a la pensión de sobrevivientes, pese a haberse disuelto y liquidado la sociedad conyugal, señalando que “...*la sociedad conyugal constituye el régimen patrimonial del matrimonio y nace de él, su disolución y liquidación no pone fin al vínculo matrimonial...*” (SL3251-2021); no obstante, acoge el criterio de la Corte Constitucional, porque se ciñe a lo que dice la norma respecto a la exigencia de acreditar la sociedad conyugal vigente, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, cuando se reclama en calidad de cónyuge supérstite, existiendo separación de hecho; requisito que no se cumple en el asunto bajo estudio.

Aunado a que en la Sentencia SU 298 de 2015, señaló esta Corporación, que en los eventos en que existen dos precedentes, uno de la jurisdicción especializada y otro de la constitucional, “...*es el precedente constitucional, por ser producto de la interpretación autorizada de la Constitución, que es norma de normas, el que debe irradiar la doctrina de las demás jurisdicciones. En virtud del principio de supremacía constitucional, los jueces y las autoridades administrativas en su labor de aplicación del ordenamiento jurídico deben dar prevalencia a los postulados constitucionales cuyo contenido está expuesto no sólo por la literalidad de las normas, sino por la interpretación que de ellas hace la Corte Constitucional...*”. De igual forma, en la Sentencia T-109 de 2019, la Corte precisó que el precedente constitucional tiene “...*carácter vinculante, no solo en forma vertical (respecto de todos los jueces que conforman la jurisdicción constitucional), sino también para los órganos de cierre de las demás jurisdicciones que, en aras del principio de supremacía constitucional, deben procurar por una lectura sistemática del derecho, la cual comprende la interpretación auténtica de la Constitución, que se encuentra a cargo de la Corte...*”. Por su parte, en Sentencia SU354-2017 señaló que “...*los fallos emitidos por la Corte irradian dos tipos de efectos: en el caso de los fallos de control abstracto de constitucionalidad estos hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, de ahí que se ha reconocido su carácter vinculante, obligatorio y de fuente de derecho; por el contrario, los efectos de los fallos de tutela en principio son inter partes. No obstante, existe un punto de encuentro y es que ambos fallos se deben observar, no solo por reconocer que la Constitución es norma superior, sino para garantizar el derecho a la igualdad de los administrados...*”.

Por tanto, esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente, **CONFIRMAR** la Sentencia de Primera Instancia, por otras razones, absolviendo a COLPENSIONES de las pretensiones formuladas en su contra por el demandante.

Costas Procesales en esta instancia, a cargo de la parte demandante, al no prosperar el recurso de apelación interpuesto, y a favor de la parte demandada. Se fija como agencias en derecho en esta Sede la suma total de UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín el 09 de marzo de 2018, promovido por el señor **GUILLERMO ANTONIO VÉLEZ VÉLEZ** en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Costas Procesales en esta instancia, a cargo de la parte demandante, al no prosperar el recurso de apelación interpuesto, y a favor de la parte demandada. Se fija como agencias en derecho en esta Sede la suma total de UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Se ordena regresar el expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 550c8e7791ba689ca5f8c35007b4f5cb51262bebac050e9e07af9fdfaccf143f

Documento generado en 02/08/2023 03:22:11 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>